

**RIT N°** : I-412-2021  
**RUC N°** : 21-4-0370880-9  
**MATERIA** : RECLAMACION MULTA ADMINISTRATIVA  
**DEMANDANTE** : UC CHRISTUS SERVICIOS AMBULATORIOS  
SPA  
**DEMANDADO** : INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO  
DE SANTIAGO

\*\*\*\*\*

Santiago, seis de julio de dos mil veintidós.

**VISTOS, OIDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que compareció Paulina Peters Haedicke, en representación de **UC CHRISTUS SERVICIOS AMBULATORIOS SPA.**, todos domiciliados en Marcoleta N°352, Local 4, Santiago quien interpone reclamo judicial en contra de la **INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO**, representada legalmente por Guillermo Reyes Arredondo, ambos domiciliados en Moneda N°732, comuna de Santiago, a fin de que se deje sin efecto las multas reclamadas o bien rebajadas a su mínimo legal, con costas.

Fundando lo anterior señala que por medio de la Resolución de multa N°8507/21/37 de fecha 21 de septiembre de 2021, la reclamante resolvió cursar seis multas a su representada, la primera de ellas por la suma de 40UTM (\$2.105.240), la segunda de ellas por la suma de 40UTM (\$2.105.240), la tercera de ellas por la suma de 60UTM (\$3.157.860), la cuarta de ellas por la suma de 60UTM (\$3.157.860), la quinta de ellas por la suma de 60UTM (\$3.157.860) y la sexta de ellas por la suma de 60UTM (\$3.157.860).

Explica que la multa N°2 y N°5 de dicha resolución (N°8507/21/37) serán reconsideradas administrativamente solicitando la rebaja al haber acreditado que se dio cumplimiento a las normas que se entienden infringidas.



Por medio de esta presentación indica, solicita que las multas N°1, 3, 4 y 6 de la resolución N°8507/21/37, sean dejadas sin efecto, en atención a los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación expongo:

Sostiene que la multa n°8507/21/37-1, debe ser dejada sin efecto por adolecer de errores de hecho y de derecho.

Explica que en virtud de la resolución impugnada, se ha cursado una multa a su representada, la que se sustenta en los siguientes fundamentos:

“1. No asesorar ni desarrollar el departamento de prevención de riesgos, acorde con las funciones mínimas exigidas, las labores como el reconocimiento y evaluación de los riesgos en el ambiente o medios de trabajo (no se confecciona matriz de riesgos, no se realiza levantamiento de servicios higiénicos, no existen evaluaciones ambientales cualitativas o cuantitativas), tal hecho es un incumplimiento a las obligaciones legales sobre prevención de riesgos profesionales e implica no disponer las medidas que protejan eficazmente la vida y salud de los trabajadores al interior de la empresa.”

En razón de lo anterior indica, se consideran infringido el artículo 66 inciso 4° de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en relación con el artículo 8 inciso segundo y artículo 12 del Decreto Supremo N°40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y los artículos 184 y 506 del Código del Trabajo. Agrega que esta multa debe ser dejada sin efecto por los argumentos de hecho y derecho que se expondrán a continuación.

Manifiesta que se debe dejar sin efecto la Multa N°1 por ser ininteligible y carecer de fundamentos mínimos para ser adecuadamente comprendida. No queda claro que se lo que se intenta sancionar.

En primer lugar refiere, resulta necesario señalar que, si bien la multa contiene una extensa glosa, de una simple lectura de la misma, no se logra comprender qué es lo que intenta sancionar el fiscalizador, toda vez que se le reprocha una serie de supuestos incumplimientos genéricos, sin mayor detalle, al punto que no es posible determinar qué es lo que supuestamente no habría hecho la empresa.

Alega que en este sentido, cabe preguntarse ¿Cuáles son los riesgos que no se incluyeron en la matriz de riesgos?, ¿En qué sentido no se realizó el levantamiento de los servicios higiénicos? ¿Qué evaluaciones ambientales no se llevaron a cabo? Agrega que el fiscalizador se limita simplemente a enunciar obligaciones genéricas del empleador, sin entregar detalles objetivos que permitan cumplir con dichas obligaciones.

Hace presente que aquello resulta determinante saber qué es lo que imputa la multa a la empresa, sobre todo considerando que dichos documentos no fueron solicitados. A este respecto agrega, nuestra jurisprudencia ha sido clara en declarar inválidas multas cursadas que carecen de todos los elementos de hecho necesarios para describir correctamente la conducta sancionada.

Establece que podemos citar al efecto una sentencia dictada con fecha 8 de febrero de 2018, en la causa caratulada “Comercial Madison con Inspección Provincial del Trabajo Puerto Montt”, causa RIT I-72-2018, del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt. En este caso, el juez al dejar sin efecto la multa señaló:

“DECIMO CUARTO: Que, de la prueba aportada al proceso, especialmente de la multa cursada, transcrita en el considerando décimo segundo, –que es la que tipifica la sanción administrativa y por tanto, constata el hecho ilegítimo–, de modo alguno es posible desprender cuáles fueron los lineamientos de razonabilidad tenidos en consideración por el fiscalizador al determinar una infracción a la legislación laboral, pues no se divisa la descripción de una conducta infractora de la legislación laboral, que permita al sancionado articular su defensa en base a argumentaciones jurídicas y fácticas ciertas. A este respecto, se debe recordar que la infracción constatada textualmente señala: “NO INFORMAR A SUS TRABAJADORES DE LOS RIESGOS QUE ENTRAÑAN SUS LABORES, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PERTINENTES Y LOS MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO, RESPECTO DE LOS ELEMENTOS, PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUE DEBAN UTILIZAR EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS O EN SU TRABAJO, SOBRE

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MISMOs, LÍMITES DE EXPOSICIÓN PERMISIBLES Y DE LOS PELIGROS PARA LA SALUD Y LAS MEDIDAS DE CONTROL”, sólo indicando la normativa legal supuestamente infringida a continuación, sin precisar cuáles eran los riesgos que no informó, o cuál era en definitiva el piso mínimo de exigencias que debía cumplir en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del D.S. 40 de 1969, en relación a las labores desempeñadas por los trabajadores, las que, en todo caso tampoco señala. Que, de esta forma, e independientemente del fondo del asunto, lo cierto es que la decisión del órgano administrativo fiscalizador, que se vierte en la resolución de multa, no indicó de qué forma entendió que las normas laborales se han visto infringidas, pues, como se ha señalado, no basta con indicar un precepto normativo, sino que resulta menester además la adecuada fundamentación del mismo, la que en ningún caso se puede suplir al momento de contestar la demanda, como pretende la reclamada, sino que la resolución de multa debe bastarse a sí misma, revelando los antecedentes que permitan su acertada inteligencia. Que, sostener lo contrario —esto es, la no existencia o exigencia de la adecuada tipificación o fundamentación al momento de aplicar una sanción administrativa-, no solo importaría desapegarse del mandato constitucional de un justo y racional procedimiento, sino que dejaría a los ciudadanos en la indefensión, pues impediría el control de los órganos judiciales en cuanto a decisiones adoptadas por la autoridad fiscalizadora, pues la mera transcripción de un artículo o norma jurídica, en caso alguno implica una adecuada fundamentación, toda vez que no se apoya ni en motivos ni razones ciertas de que pueda hacerse cargo el reclamante, o esta sentenciadora. Que, por todo lo antes expuesto, la multa antes referida será dejada sin efecto.”

Menciona que la descripción clara de la conducta que se sanciona es una obligación para el fiscalizador toda vez que representa una manifestación del poder punitivo del estado, siendo a su vez, una garantía para el fiscalizado ya que le permite enfrentar la decisión del estado con diferentes alternativas. Agrega que puede ser asumiendo el pago de la multa, enmendando el error y

solicitando una rebaja, o bien reclamándola administrativa o judicialmente con el objeto de que sea dejada sin efecto.

Pues bien precisa, si no se sabe exactamente lo que se sanciona, ¿Cómo se podría intentar subsanar? Es simplemente imposible. Por ejemplo agrega, si a la Inspección del Trabajo por alguna razón no le hubiesen parecido suficiente las medidas adoptadas, se podrían haber instruido una mejora de las mismas. Pues bien añade, nada de ello ocurre, ya que simplemente no sabemos que es, exactamente, lo que la Inspección del Trabajo estima que no existiría.

Narra que resulta evidente que del contenido de la multa que es objeto del presente reclamo no cumple dicho estándar mínimo. Agrega que no permite responder qué es lo que identificó exactamente el fiscalizador y que representaría un incumplimiento a las normas mencionadas, por lo que resulta evidente la inconsistencia y falta total de fundamentos de la multa cursada. Añade que esta sola circunstancia determina que la multa deba dejada sin efecto.

Además razona, la multa debe ser dejada sin efecto ya que las normas legales que se estiman infringidas no dicen relación con los supuestos hechos constatados por la Inspección del Trabajo. Error de derecho.

Advierte que en el presente caso, el fiscalizador cursó la multa de referencia toda vez que habría considerado infringidas obligaciones que imponen el artículo 66 inciso 4° de la Ley N°16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y el artículo 12 del Decreto Supremo N°40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Pues bien señala, si se le puede dar un sentido a la multa N°1, de la simple lectura de ambas normas, es posible constatar que ellas no se vinculan en lo absoluto con los supuestos hechos que la Inspección del Trabajo habría verificado en la fiscalización realizada. Agrega que en este caso se entienden infringidas las siguientes normas:

(i) El artículo 66 inciso 4° de la Ley 16.744, en relación con el artículo 8 inciso segundo y artículo 12 del Decreto Supremo N°40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y

(ii) los artículos 184 y 506 del Código del Trabajo. Esta multa debe ser dejada sin efecto por los argumentos de hecho y derecho que se expondrán a continuación.

Según explicaremos dice, no existe incumplimiento de tales normas, no siendo posible sostener la validez de la multa.

Expresa que no existe infracción al 4 del artículo 66 de la Ley N°16.744.

Sostiene que el inciso 4 del artículo 66 de la Ley N°16.744, señala expresamente lo siguiente:

“En aquellas empresas mineras, industriales o comerciales que ocupen a más de 100 trabajadores será obligatoria la existencia de un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, el que será dirigido por un experto en prevención, el cual formará parte, por derecho propio, de los Comités Paritarios.”

Indica que la multa imputa la falta de asesoría y desarrollo del Departamento de Prevención de Riesgos. Agrega que para fundar aquello indica el fiscalizador que no se habría confeccionado la matriz de riesgos, realizado el levantamiento de servicios higiénicos ni efectuado evaluaciones ambientales. Ahora bien añade, en ninguna parte de la multa se le atribuye a mi representada el hecho de no contar con un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, o que éste no esté dirigido por un experto en prevención.

Explica que sin perjuicio de que su representada cumplió con cada una de las obligaciones que el impone la legislación en materia de evaluación de riesgos, del simple contraste de la disposición legal con la glosa de la multa se advierte que los supuestos formulados por la Inspección del Trabajo no se vinculan siquiera remotamente con la norma que se invoca como infringida. Este error de derecho evidentemente afecta la validez del acto administrativo, siendo suficiente fundamento para que sea dejada sin efecto.

Manifiesta que no existe infracción al artículo 12 del Decreto Supremo N°40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Agrega que la norma no tiene relación con lo que se imputa en la multa.

Refiere que lo mismo ocurre con el artículo 12 del Decreto Supremo N°40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, toda vez que éste indica que:

“Los Departamentos de Prevención de Riesgos de las empresas están obligados a llevar estadísticas completas de accidentes y enfermedades profesionales, y se computarán como mínimo la tasa mensual de frecuencia y la tasa semestral de gravedad de los accidentes del trabajo.

Se entenderá por tasa de frecuencia el número de lesionados por millón de horas trabajadas por todo el personal en el periodo considerado, y por tasa de gravedad el número de días de ausencia al trabajo por los lesionados por millón de horas trabajadas por todo el personal en el periodo considerado. Al tiempo de ausencia al trabajo deberá agregarse el número de días necesario de acuerdo con las tablas internacionales para valorar las incapacidades permanentes y muertes.

Se incluirán en las tasas los lesionados cuya ausencia al trabajo haya sido igual o superior a una jornada normal. Del mismo modo se incluirán aquellos casos llamados trabajo liviano, en que el accidentado no se ausenta del trabajo, pero está impedido de efectuar su actividad habitual.”

En definitiva alega, no cabe sino preguntarse ¿En qué se vincula el cálculo de estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales con la supuesta falta de matriz de riesgos, evaluaciones ambientales y levantamiento de servicios higiénicos? Pues en nada. No existe vínculo entre ellos. Al igual que en el caso anterior agrega, este error de derecho afecta la validez del acto administrativo, siendo suficiente fundamento para que sea dejada sin efecto.

Hace presente que de igual manera, respecto al artículo 12 del Decreto Supremo N°40, señala en igual sentido que:

“VIGESIMO TERCERO: Se indica también infringido el artículo 8 inciso 2 y 12 del D.S. N°40 (...)

VIGESIMO CUARTO: Que tal como hemos revisado de estas normas, la constitución del Departamento de Prevención de Riesgos y sus obligaciones en las normas que dan cuenta escapan de la construcción de la sanción aplicada, ya que no se indica que no hubieran estado operativos o constituidos los comités o departamentos de prevención de riesgos o que no se hubiera trabajado en forma clara y palmaria en la identificación de algún riesgo (...)"

Establece que no resulta procedente que la Inspección del Trabajo multe a mi representada en virtud de normas que no tienen relación alguna con los hechos supuestamente constatados. Agrega que al no invocar correctamente las normas que se entienden infringidas, la multa deberá ser dejada sin efecto.

Al respecto menciona, podemos citar un fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, con fecha 15 de enero de 2018, en causa RIT I-50-2017, caratulada "San Francisco Investment S.A. con Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua", en el cual se deja sin efecto una multa cursada en términos similares, en base a argumentos en los mismos términos que lo hemos planteado. Agrega que en tal caso el tribunal sostuvo que:

"Al respecto la Inspección del Trabajo debe aplicar sanciones cuando la conducta infringida se encuentre claramente establecida en la ley, situación que no ocurre en el caso de autos ya que: 1. Se indica infringido el artículo 66 de la Ley 16.744 (...) Que respecto de esta norma lo que puede sancionar la Inspección del Trabajo es no tener Comités Paritarios de Higiene y Seguridad cuando se cumplen los requisitos legales para su constitución (...)"

Precisa que tampoco existe infracción al artículo 8 inc. 2 del DS N°40. Esta norma establece una obligación que nada tiene que ver con lo que se imputa.

Ahora bien narra, el artículo 8 inciso segundo del Decreto Supremo N°40, norma que también se entiende infringida por el fiscalizador, dispone obligaciones bastante similares a las establecidas en el artículo 66 de la Ley N°16.744, pero que no tienen relación con la multa cursada. En este sentido, obligar a las empresas con más de 100 trabajadores a contar con un



Departamento de Prevención de Riesgos. Agrega, además, la siguiente obligación:

“La organización de este Departamento dependerá del tamaño de la empresa y la importancia de los riesgos, pero deberá contar con los medios y el personal necesario para asesorar y desarrollar las siguientes acciones mínimas: reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, (...).”

De esta manera advierte, la norma busca que el empleador, una vez conformado el Departamento de Prevención de Riesgos, ponga a su disposición los medios y personal necesario con que debe contar para asesorar y desarrollar aquellas acciones mínimas, con el objeto de que este efectúe el correspondiente reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. Por tal motivo, solo se puede entender incumplida la norma si ello no ocurre. Tal no es el caso.

Razona que el fiscalizador, supuestamente, constató que la empresa no contaría con matriz de riesgos, no realiza el levantamiento de los servicios higiénicos y no realiza evaluaciones ambientales. Agrega que dichas conclusiones – que no son correctas – no se relacionan con lo que regula la norma, cual es garantizar que el Departamento de Prevención de Riesgos cuente con los medios y personal mínimo para asesorar en materias de su competencia y nada más.

Señala que los hechos enunciados por la Inspección del Trabajo se encuentran en nuestra legislación en disposiciones específicas que permiten sancionar al empleador en caso de su incumplimiento. El artículo 8 inciso segundo del DS. N°40 de 1969 no es el caso.

En tal sentido explica, los ya citados considerandos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, en causa RIT I-50-2017, caratulada “San Francisco Investment S.A. con Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua”, destacaron que:

“VIGESIMO TERCERO: Se indica también infringido el artículo 8 inciso 2 y 12 del D.S. N°40 (...)

VIGESIMO CUARTO: Que tal como hemos revisado de estas normas, la constitución del Departamento de Prevención de Riesgos y sus obligaciones en las normas que dan cuenta escapan de la construcción de la sanción aplicada, ya que no se indica que no hubieran estado operativos o constituidos los comités o departamentos de prevención de riesgos o que no se hubiera trabajado en forma clara y palmaria en la identificación de algún riesgo (...)"

Indica que de esta manera, resulta evidente que el hecho no está tipificado de forma alguna en la disposición alegada.

Sostiene que por último, tal como han resuelto nuestros tribunales, las sanciones y multas no se pueden fundar simplemente en la obligación genérica que establece el artículo 184 del Código del Trabajo.

Por último expresa, el fiscalizador en esta como en todas las multas considera que se constata una infracción del artículo 184 del Código del Trabajo. Norma que las Inspecciones del Trabajo por defecto siempre identifican como infringida cuando intentan impugnar un incumplimiento en materia de seguridad. Ahora bien añade, esta norma no puede ser invocada como el fundamento de la presente multa, en defecto de todas otras las disposiciones que, según hemos indicado, no tienen relación alguna con los hechos que se mencionan.

Indica que en efecto, si bien dicha norma del Código del Trabajo establece la obligación del empleador a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, esta no puede ser utilizada de manera general para fundar infracciones a circunstancias específicas que han previamente determinadas por el legislador, y, en este caso, para poder subsanar las claras y evidentes deficiencias del acto administrativo.

De lo contrario manifiesta, resultaría necesario preguntarse ¿para qué sirven todas las otras disposiciones específicas?

Refiere que en tal sentido lo han entendido los tribunales nacionales. Ejemplo de ello es el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua que, con fecha 15 de enero de 2018, en causa RIT I-50-2017, caratulada "San Francisco

Investment S.A. con Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua”, determinó que:

“VIGÉSIMO SÉPTIMO: Por último, cita el artículo 184 del Código del Trabajo respecto a la obligación de seguridad. Que esta norma es genérica respecto de las obligaciones del empleador con el trabajador en materia de seguridad y debe ser objeto de un juicio por responsabilidad contractual entre las respectivas partes, pero no es posible utilizarla de manera genérica para fundar una sanción que de por sí debe ser específica en cuanto a una infracción determinada.”

Alega que según se observa del razonamiento del mencionado fallo, no resulta posible fundar únicamente una infracción tan específica como lo es, por ejemplo, no realizar la matriz de riesgos o no efectuar evaluaciones ambientales, con una norma que establece una obligación general de seguridad que recae sobre el empleador.

Hace presente que entender lo contrario implicaría eliminar toda certeza sobre los deberes y obligaciones que debe cumplir el empleador, y cómo debe cumplirlos, ya que siempre existiría la posibilidad de ser sancionado por la aplicación del artículo 184 del Código del Trabajo en abstracto. La Inspección del Trabajo agrega, en el ejercicio de su facultad fiscalizadora y sancionadora debe, necesariamente, fundar correctamente las sanciones que aplica.

Establece que cabe señalar que la fiscalización no se produce en el marco de un accidente del trabajo o enfermedad profesional.

Menciona que el artículo 8 inciso segundo del Decreto Supremo N°40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social establece normas respecto al reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.

Precisa que la fiscalización efectuada a mi representada no se llevó a cabo en el marco de un accidente o enfermedad profesional, ni mucho menos inició como consecuencia del incumplimiento respecto a normas de seguridad. En ese sentido agrega, sobre todo considerando el número, la falta de

fundamentos la reiteración de los supuestos fundamentos es que la multa resulta ser un acto contrario a la legalidad.

Advierte que se debe dejar sin efecto la Multa N°1, ya que la multa sanciona el no contar con documentos que no fueron solicitados formalmente en el Requerimiento de Documentación.

Razona que sin perjuicio de los graves e insalvables errores de derecho que contiene la multa, ésta de igual forma debe ser dejada sin efecto al haberse cursado existiendo inconsistencias en el proceso de fiscalización. En efecto agrega, Insólitamente, la multa cursada a su representada se funda (de lo que se puede deducir de la misma), en la supuesta falta de matriz de riesgos, de levantamiento de servicios higiénicos y evaluaciones ambientales.

Si bien narra, como ya fue señalado, resulta imposible determinar con claridad qué norma u obligación específica no cumplió su representada, si le podemos encontrar algún sentido, resulta, a lo menos curioso, que el Requerimiento de Documentación efectuado con fecha 9 de septiembre de 2021 por la Inspección del Trabajo, no incluya documentos que efectivamente permitan determinar si la empresa ha cumplido o no con dichos deberes. En efecto añade, el fiscalizador determina que su representada no ha confeccionado matriz de riesgos, o no ha efectuado evaluaciones ambientales en circunstancias que jamás solicitó formalmente documentos relacionados con ello.

En este sentido señala, el requerimiento ordenaba la remisión de los siguientes antecedentes:

“contrato de trabajo experto en prevención de riesgos, registro de asistencia de experto en prevención de riesgos, registro seremi de salud del experto, registro de sanitización de los servicios higiénicos, registro del isp de los productos higiénicos de desinfección, resolución sanitaria de funcionamiento del establecimiento.”

Expone que de un análisis de dichos documentos, ¿Cómo es posible que el fiscalizador concluyera que la empresa no cuenta con matriz de riesgos si no lo ha solicitado formalmente? ¿O que no realiza el levantamiento de

servicios higiénicos? ¿En qué sentido, incluso remotamente, ellos se relacionan con aspectos ambientales? La respuesta es que ello resulta imposible en base a la información solicitada.

Dice que es evidente que no existe explicación alguna. Es necesario preguntarse ¿Cómo es posible multar a una empresa por tales circunstancias si el fiscalizador no solicitó formalmente documentos al respecto? ¿Esperaba el fiscalizador que mi representada adivinara que debía enviarlos? No resulta razonable agrega, e inadmisible en el marco de un proceso administrativo. Por lo anterior añade, la multa también debe ser dejada sin efecto.

Sostiene que no existe obligación legal de mantener el documento denominado “matriz de riesgos”, por lo que no es posible sancionar eventuales deficiencias del mismo.

Indica que en este caso el fiscalizador reprocha insuficiencias del documento denominado “Matriz de Riesgos”, sin embargo, si existiese algún error u omisión en el instrumento, ello no podría dar lugar a una infracción, ya que este es un documento que no exige la ley.

En efecto expone, no existe disposición legal alguna que imponga a la empresa la obligación de confeccionar una matriz de riesgos. Agrega que menos aún en términos tan genéricos como los indicados por el fiscalizador, esto es, sin referirse a la materia que deberá evaluar.

Manifiesta que lo importante y lo que exige la ley, es que los riesgos sean informados a los trabajadores y ello ocurrió en el presente caso según hemos explicado.

Por ello refiere, no puede el inspector sancionar a la empresa por no exhibir un documento que no fue solicitado formalmente, y que, además, no es obligatorio confeccionar.

Alega que a mayor abundamiento, los riesgos están informados, por ejemplo, en el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de la empresa. Agrega que si se ha informado sobre los riesgos, es evidente que se han evaluado.

En el presente caso hace presente, la Inspección del Trabajo sancionó a mi representada por una supuesta falta de reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, control de riesgos en el ambiente o en el trabajo.

Establece que este aspecto es relevante, ya que lo que persigue la normativa citada, finalmente, es que los trabajadores puedan tomar conocimiento de tales riesgos, lo que sí ocurrió en el presente caso.

De esta forma menciona, no puede existir un incumplimiento a las normas que fundan la multa, toda vez que del mismo Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de UC Christus Servicios Ambulatorios SpA, se desprende que los riesgos en esta materia sí fueron informados. En otras palabras añade, UC Christus Servicios Ambulatorios SpA dio pleno cumplimiento a su obligación de informar los riesgos laborales o “Derecho a Saber” informando los riesgos que entrañan las labores, las medidas preventivas y los métodos de trabajo seguro.

Cabe señalar precisa, por lo demás, que el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de su representada no fue solicitado por el fiscalizador, no pudiendo determinar el contenido de este.

Narra que a mayor abundamiento, si lo que al fiscalizador lo que le preocupa es que la empresa no haya identificado los riesgos, la respuesta contraria fluye del mismo Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. Es evidente que agrega, si la empresa incorporó en el Reglamento Interno dichos riesgos, dentro del catastro de riesgos a los que está expuesto un trabajador, ello naturalmente se debe a que previamente identificó ese riesgo.

Razona que por último, se intenta sancionar 3 veces por las mismas situaciones. Vulneración del principio Non Bis In Idem.

En el presente caso advierte, al observar la Resolución de Multa N°8507/21/37, resulta evidente que el fiscalizador intenta sancionar a su representada por las mismas situaciones en distintas multas.

En este sentido señala, la Multa N°1 sancionaría a la empresa por, supuestamente, no contar con una matriz de riesgos. Agrega que pese a las

deficiencias insalvables ya señaladas respecto de dicha conclusión, lo cierto es que, además, va en la misma línea que la Multa N°3 de la misma Resolución, la que, aunque genérica, también hace referencia a la matriz de riesgos.

Al respecto dice, la Multa N°3 constataría que la empresa no mantiene las condiciones adecuadas de seguridad al no identificar los peligros y evaluar los riesgos, ello, por no contar con una matriz de riesgos.

De igual manera expresa, la Multa N°1 se funda en un supuesto incumplimiento al levantamiento de los servicios higiénicos. Como ya señalaron anteriormente agrega, resulta imposible saber a qué incumplimiento específico pretende referirse el fiscalizador, toda vez que la multa es evidentemente insuficiente en sí misma. Añade que pese a lo anterior, es posible observar que la Multa N°6 se refiere nuevamente a los servicios higiénicos, indicando que estos serían, presuntamente, de uso mixto y con acceso restringido.

Por tanto sostiene, en atención al escueto contenido de la Multa N°1, esta parte no puede sino concluir que ella se refiere a los supuestos hechos constatados en la Multa N°6, respecto a los servicios higiénicos. En ese sentido agrega, el fiscalizador forzosamente intenta elaborar 3 en base a un mismo supuesto incumplimiento. Incumplimiento que, además, se suma a otros también relacionados con deficiencias en instalaciones específicas, respecto de las cuales además cursa 3 multas independientes.

Explica que no resulta procedente que el inspector constate – erróneamente – determinada circunstancia y curse tres multas distintas, por tales hechos.

Indica que debe dejarse sin efecto la multa n°3 de la resolución N°8507/21/37.

Manifiesta que en virtud de la resolución impugnada, se ha cursado una multa a mi representada, la que se sustenta en los siguientes fundamentos:

“3. No mantener las condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral al no identificar los peligros y evaluar los riesgos que están presentes en el lugar de trabajo, según el siguiente detalle: empresa no posee confeccionada la matriz de riesgos del lugar fiscalizado, lo que afecta a los siguientes

trabajadores: Dennisse Aguirre, Anita Beltrán, Francisco Campos, María Díaz, María Estay, Ignacio Farías, Angélica Gálvez, Jesús Guzmán, Luz Hurtado Y Verónica Palma.”

Refiere que en razón de lo anterior, se consideran infringidos el artículo 184 inciso 1° y 2° y artículo 506 del Código del Trabajo. Esta multa debe ser dejada sin efecto por los argumentos de hecho y derecho que se expondrán a continuación.

Alega que la descripción de los hechos que fundamentan la multa es absolutamente genérica y no sanciona ninguna conducta en específico.

Hace presente que en este caso nuevamente el fiscalizador incurre en un evidente error de derecho, al intentar sancionar a su representada en virtud de una multa cuya glosa no escribe ninguna situación en específico. En efecto agrega, si observamos la multa N°3 nos damos cuenta de que no es posible identificar o presumir, en que materias se habrían mantenido condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo. Añade que más parece que es un intento inaceptable de reiteración de lo ya impugnado en otras de las multas cursadas.

Establece que la multa es ininteligible, al carecer de los fundamentos mínimos para ser adecuadamente comprendida. Agrega que la descripción de los hechos que fundamentan la multa es absolutamente genérica y no sanciona ninguna conducta en específico.

Menciona que si bien la multa contiene una glosa de 6 líneas, si se analiza en detalle vemos que no se logra comprender a cabalidad exactamente qué es lo que intenta sancionar el fiscalizador. Se advierte del tenor de la multa agrega, que le reprocha la inexistencia de algo, pero no se logra dilucidar claramente que es.

Precisa que la multa comienza con una imputación genérica que no es sino una transcripción de la norma legal, al indicar lo siguiente:

“No identificar los peligros y evaluar los riesgos que están presentes en el lugar de trabajo.”

Luego acto seguido añade, agrega:



“Empresa no posee confeccionada la matriz de riesgos del lugar fiscalizado”.

Narra que frente a las imputaciones que efectúa el ente administrativo en la multa, cabe preguntarse:

a. ¿Qué es lo que supuestamente no hizo la empresa? No es posible responder esta pregunta.

b. ¿A qué riesgos se refiere? No es posible responder esta pregunta.

c. ¿Qué es lo que se esperaba que hiciera la empresa? No es posible responder esta pregunta.

d. ¿Cómo puede constatar la inexistencia de matriz de riesgos si no la ha solicitado? No es posible responder esta pregunta.

e. ¿En qué se diferencia esta multa de lo que se intenta sancionar en las multas números, 1, 4, 5 y 6? No es posible responder esta pregunta.

f. ¿Qué es lo que está imputando la multa si, por otro lado, en la Multa N°1 está sancionando expresamente el hecho de –supuestamente-, no confeccionar la matriz de riesgos? Agrega que este es un cuestionamiento que resulta válido en el presente caso ya que si lo que quiso decir es que no existen acciones destinadas a informar a los trabajadores sobre riesgos específicos, - lo que la multa no hace -, somos claros en señalar que la empresa sí los cumple, según acreditaremos en la etapa procesal pertinente. Además, ya los está intentando sancionar por medio de la multa N°1.

g. ¿Qué es lo que identificó exactamente el fiscalizador y que considera un incumplimiento a las normas mencionadas? La verdad nunca lo sabremos. Tampoco podrá la Inspección del Trabajo complementar su resolución mediante la contestación del presente reclamo judicial de multas.

Señala que según han señalado, la falta de especificidad en la descripción de la glosa en que se describen los hechos en que se funda la multa tiene repercusiones prácticas en distintos ámbitos, uno de ellos es en materia de recursos y si la empresa supiese exactamente qué es lo que se le imputa, podría eventualmente utilizar otras vías de impugnación. Por ejemplo, si a la Inspección del Trabajo por alguna razón no le hubiesen parecido

suficiente las medidas adoptadas, se podrían haber instruido una mejora de las mismas. Pues bien agrega, nada de ello ocurre, ya que simplemente no sabemos que es lo que exactamente estima la Inspección del Trabajo que no existiría.

A este respecto dice, nuestra jurisprudencia ha sido clara en declarar inválidas las multas cursadas que carecen de todos los elementos de hecho necesarios para describir correctamente la conducta sancionada. Agrega que la ya citada sentencia dictada con fecha 8 de febrero de 2018, en la causa caratulada “Comercial Madison con Inspección Provincial del Trabajo Puerto Montt”, causa Rit I-72-2018, del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, señala expresamente que se la resolución de multa debe bastarse a sí misma e indicar de qué forma las normas laborales se entienden infringidas.

Expone que del tenor de la multa, simplemente no es posible responder qué es lo que identificó exactamente el fiscalizador y que califica como un incumplimiento a las normas mencionadas, por lo que resulta evidente la inconsistencia y falta total de fundamentos de la multa cursada. Si le encontramos algún sentido agrega, no es más que la reiteración de otras multas que constan en la misma resolución. Esta sola circunstancia determina que deba dejada sin efecto.

Sostiene que se debe dejar sin efecto la Multa N°3 por haber sido cursada con manifiesto error de derecho. Agrega que las multas impuestas por la Inspección del Trabajo no se pueden fundar únicamente en la obligación genérica que establece el artículo 184 del Código del Trabajo.

Explica que como se indicó anteriormente, las multas no se pueden fundar solamente en la supuesta infracción del artículo 184 del Código del Trabajo, toda vez que establece ella solo establece la obligación genérica del empleador de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Norma que por lo demás se entiende infringida en las 6 multas cursadas en la resolución de fecha 21 de septiembre de 2021.

A ese respecto indica, resulta relevante reiterar lo resuelto por el recién citado fallo, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, en

causa RIT I-50-2017, en el que se concluyó que “no es posible utilizarla de manera genérica para fundar una sanción que de por sí debe ser específica en cuanto a una infracción determinada.”

Manifiesta que en este caso, no resulta procedente fundar la supuesta infracción específica a la obligación de realizar la matriz de riesgos (no se sabe sobre qué) con una norma que establece una obligación general.

Refiere que sin perjuicio de lo anterior, de igual forma se debe dejar sin efecto la Multa N°3. Agrega que la multa fue cursada por la supuesta falta de documentos que no fueron solicitados formalmente en el Requerimiento de Documentación y que si existen.

Alega que al igual que en la multa N°1 cursada por la Inspección del Trabajo, el Requerimiento de Documentación efectuado con fecha 9 de septiembre de 2021, de forma alguna se incluye documentos que se puedan vincular con la obligación supuestamente infringida.

Hace presente que cabe recordar que el requerimiento ordenaba remitir los siguientes antecedentes:

“Contrato de trabajo experto en prevención de riesgos, registro de asistencia de experto en prevención de riesgos, registro seremi de salud del experto, registro de sanitización de los servicios higiénicos, registro del isp de los productos higiénicos de desinfección, resolución sanitaria de funcionamiento del establecimiento.”

Se pregunta ¿En qué se relacionan ellos con la matriz de riesgos? ¿Cómo es posible que el fiscalizador no solicitara formalmente la matriz de riesgos y aun así constate que no existe? Agrega que el fiscalizador entiende infringida una norma específica, sin siquiera haber solicitado formalmente documentos relativos a este punto. Por tanto añade, la multa carece de todo sustento y debe ser dejada sin efecto.

A mayor abundamiento establece, se debe dejar sin efecto la Multa N°3, por intentar sancionar dos veces la misma conducta por vulneración del principio Non bis in idem.

En este caso menciona, la conducta que se sanciona mediante las multa N°3 es exactamente la misma que la sancionada por la multa N°1.

Precisa que en este sentido, se refieren exactamente a los mismos hechos y se fundan en la misma norma. Añade que ello queda en evidencia del simple análisis de los hechos que se describen en las mismas.

Narra que la multa N°1 señala:

“1. No asesorar ni desarrollar el departamento de prevención de riesgos, acorde con las funciones mínimas exigidas, las labores como el reconocimiento y evaluación de los riesgos en el ambiente o medios de trabajo (no se confecciona matriz de riesgos, no se realiza levantamiento de servicios higiénicos, no existen evaluaciones ambientales cualitativas o cuantitativas) (...)

Y se funda en los artículos 66 inciso 4° de la Ley N°16.744, artículos 8 inciso 2° y 12 del Decreto Supremo N°40 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y en el artículo 506 y artículo 184 del Código del Trabajo.

Por su parte agrega, la multa N°3 sanciona:

3. No mantener las condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral al no identificar los peligros y evaluar los riesgos que están presentes en el lugar de trabajo, según el siguiente detalle: empresa no posee confeccionada la matriz de riesgos del lugar fiscalizado(...)

Y se funda únicamente en los artículos 184 y 506 del Código del Trabajo.

Advierte que de la lectura de las glosas de las multas, se advierte que los hechos que se sancionan en estos casos son prácticamente idénticos. Ello, toda vez que sanciona el supuesto incumplimiento a la obligación de confeccionar una matriz de riesgos.

Narra que de lo anterior se sigue que, si el Tribunal estima que las actas de fiscalización contienen “hechos”, no puede sino concluirse que la Dirección del Trabajo ha sancionado un mismo hecho mediante 2 multas en una misma resolución.

Razona que resulta ser indudable que una infracción no puede ser objeto de una doble sanción. Agrega que la facultad sancionadora del estado reconoce límites, y dentro de ellos, como principio fundamental se encuentra el denominado “non bis in ídem”, es decir, la imposibilidad de sancionar dos veces la misma conducta. La Inspección del Trabajo añade, al ejercer su facultad de sancionar contenida en diversos cuerpos normativos, se encuentra sujeta a dicho principio.

Señala que así se han pronunciado, majaderamente, nuestros tribunales de justicia. A continuación agrega, citamos un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que lo reconoce de forma expresa:

TERCERO: (...) Es en ese proceso de determinación y el ejercicio de la subsecuente actividad que tiene lugar la aplicación del principio del non bis in ídem, concepto que implica que la administración ha de sancionar la conducta lesiva principal y no todas aquellas que derivan o se relacionan directa e inmediatamente con el mismo hecho de manera tal que el incumplimiento es el que corresponde al enunciado y no de aquel subconjunto de incumplimientos relacionados que se derivan del mismo.

CUARTO: Que, analizados los antecedentes, se puede desprender que la recurrente ha sido sancionada por pagar a un trabajador un sueldo diario inferior al mínimo legal, infracción a la que se ha aparejado una multa de 4UTM. La conducta detectada constituye una infracción grave que tiene otras implicaciones jurídicas desde que una falta como la detectada lleva consigo una serie de consecuencias laborales. De la conducta anterior se derivan efectos previsionales, efectos en materia de feriados, en materia de gratificaciones, entre otros. Es el caso que la autoridad administrativa ha decidido sancionar también por el no pago de las cotizaciones previsionales, correspondientes a las remuneraciones que en derecho habrían correspondido a un trabajador de la reclamante circunstancia esta que deriva necesariamente del mismo hecho que se hace consistir en "el incumplimiento del empleador de la obligación de pagar a su trabajador una remuneración que no sea inferior al salario mínimo".

Dice que como se ha venido sosteniendo la sanción debe gozar de una individualidad claramente identificable y no puede pretenderse sancionar todas y cada una de las consecuencias derivadas del mismo ilícito contractual, ya que eso implica sancionar varias veces una misma conducta, o lo que es peor imponer sanciones accesorias emanadas de un mismo hecho de consecuencias plurijurídicas, en clara contravención a los principios que emanan de las normas constitucionales invocadas y que imponen a la administración el sujetar su actuar al principio de igualdad en el ejercicio de los derechos. (C. Santiago, 10° Sala, 20 de octubre de 2014, Ingreso No. 387-2014, los destacados son nuestros)

Pues bien expresa, en el presente caso se ha pretendido sancionar un mismo hecho mediante las multas N°1 y N°3, importando una doble sanción al mismo hecho.

Por lo anterior sostiene, al haberse infringido el principio del “non bis in ídem” por parte de la Dirección del Trabajo, pretendiendo imponer a su representada millonarias multas en forma abusiva y desproporcionada, la presente multa deberá dejarse necesariamente sin efecto.

Indica que la multa n°4 de la resolución n°8507/21/37, debe ser dejada sin efecto, los trabajadores indicados no requieren dichas y una de las personas señaladas no es trabajador de la empresa.

Explica que en virtud de la resolución impugnada, se ha cursado una multa a su representada, la que se sustenta en los siguientes fundamentos:

“4. No disponer de duchas con fría y caliente, no obstante que por la naturaleza del trabajo se toma contacto con sustancias tóxicas o que causan suciedad corporal (solo hay una ducha correspondiente al área de kinesiología, la cual es de uso mixto (hombres – mujeres), además es usada por clientes). situación que afecta a los siguientes trabajadores: Dennisse Aguirre, Anita Beltrán, Francisco Campos, María Díaz, María Estay, Ignacio Farías, Angélica Gálvez, Jesús Guzmán, Luz Hurtado Y Verónica Palma. Tal hecho constituye incumplimiento a las condiciones legales de saneamiento básico de los lugares

de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la salud e higiene de los trabajadores.”

En razón de lo anterior, se entienden infringidos los artículos 21 inciso segundo del Decreto Supremo N°594 de 1999, del Ministerio de Salud, en relación con los artículos 184 y 506 del Código del Trabajo.

Hace presente que se debe dejar sin efecto la multa N°2 por incurrir en un evidente error de hecho. Los trabajadores individualizados no se encuentran expuestos a sustancias tóxicas.

En el presente caso establece, resulta del todo imposible que el fiscalizador constatará que los trabajadores individualizados en la resolución de multa se encuentran expuestos a sustancias tóxicas, y por tanto, la empresa debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto Supremo N°594.

Menciona que lo anterior toda vez que todos los trabajadores individualizados, que prestan servicios para su representada cumplen funciones administrativas, y por tanto, no se encuentran expuestos a sustancias tóxicas de ningún tipo. Por tal motivo añade, no requieren dichas en los términos que lo exige la normativa sectorial.

En este sentido precisa, a mayor abundamiento, dichos trabajadores ocupan uniforme administrativo, toda vez que son, en su mayoría ejecutivos del Centro de Especialidades Médicas, información que se desprende de un simple análisis de sus contratos de trabajo. En otras palabras, prestan funciones administrativas.

Resulta evidente narra, de esta manera, que el fiscalizador no contempló todos los antecedentes entregados por la empresa al momento de cursar las multas, ya que, de revisar las funciones de los trabajadores en los contratos de trabajo, no habría cursado la multa que se reclama.

Por tanto advierte, cabe preguntarse, ¿A qué sustancias tóxicas considera el fiscalizador que estarían expuestos? Resulta imposible determinarlo.

Razona que de esta manera, no resulta posible que se le impute a la empresa un incumplimiento que se funda en un claro error de hecho. Agrega

que la empresa cumple con la obligación de contar con duchas en sus instalaciones, esto, respecto de los trabajadores que efectivamente deben hacer uso de ellas.

Señala que el fiscalizador incluye en la nómina a una persona que no presta servicios para UC Christus Servicios Ambulatorios SpA.

Indica que por motivos que esta parte desconoce, el inspector incluye en la nómina de trabajadores individualizados a una persona que no presta servicios para la empresa, el Sr. Jesús Guzmán. Agrega que ello no hace sino confirmar la total falta de seriedad de la presente multa. En efecto añade, dicha circunstancia evidencia que la fiscalización se llevó a cabo de manera completamente superficial, sin tener presente, nuevamente, los antecedentes aportados por la empresa.

Explica que si el fiscalizador hubiese efectuado una revisión detallada de los documentos, resulta imposible que incluyera en la nómina de trabajadores supuestamente expuestos a sustancias tóxicas a un trabajador que no presta servicios para UC Christus Servicios Ambulatorios SpA.

Por tanto sostiene, resulta completamente inadmisibles que se curse una multa a mi representada por hechos que supuestamente afectan a una persona que no presta servicios en sus instalaciones, fundándose, de esta manera, en un evidente e insalvable error de hecho.

Expresa sobre la multa n°6 de la resolución n°8507/21/37, que es objeto del presente reclamo.

Dice que en virtud de la resolución impugnada, se ha cursado una multa a su representada, la que se sustenta en los siguientes fundamentos:

“6. No contar con los servicios higiénicos según los requisitos mínimos legales en el lugar de trabajo (servicios higiénicos de uso mixto y de acceso restringido por áreas de salud), situación que afecta, entre otros, a los siguientes trabajadores: Dennisse Aguirre, Anita Beltrán, Francisco Campos, María Díaz, María Estay, Ignacio Farías, Angélica Gálvez, Jesús Guzmán, Luz Hurtado y Verónica Palma... Tal hecho constituye un incumplimiento a las condiciones legales de saneamiento básico de los lugares de trabajo e implica



no tomar las medidas necesarias para proteger la salud e higiene de los trabajadores.”

En razón de lo anterior, se consideran infringidos el artículo 21 del Decreto Supremo N°594 de 1999, del Ministerio de Salud, en relación con los artículos 184 y 506 del Código del Trabajo. Esta multa debe ser dejada sin efecto por los argumentos de hecho y derecho que se expondrán a continuación.

Manifiesta que se debe dejar sin efecto la Multa N°6 por ser ininteligible y carecer de fundamentos mínimos para ser adecuadamente comprendida. Agrega que no queda claro que se lo que se imputa. No se indica el lugar añade, al contrario de lo que ocurre con las multas 4 y 5.

Refiere que al observar la resolución, cabe preguntarse, ¿En qué área la empresa tiene servicios higiénicos de uso mixto y con acceso restringido?

En este caso alega, al igual que las multas ya analizadas, no se logra comprender específicamente qué es lo que intenta sancionar el fiscalizador, toda vez que resulta imposible determinar en qué lugar concreto la empresa no contaría con servicios higiénicos según los requisitos mínimos legales. Ello no resulta justificable agrega, desde el minuto que en las multas 4 y 5 identifica claramente las áreas. Esto ha determinado que la empresa haya comenzado a implementar medidas para poder subsanar las infracciones, las que, en este caso, no es posible identificar.

Hace presente que la descripción clara de la conducta que se sanciona es una obligación para el fiscalizador toda vez que representa una manifestación del poder punitivo del estado, siendo a su vez, una garantía para el fiscalizado ya que le permite enfrentar la decisión del estado con diferentes alternativas. Puede ser asumiendo el pago de la multa agrega, enmendando el error y solicitando una rebaja, o bien reclamándola administrativa o judicialmente a objeto de que sea dejada sin efecto.

Pues bien establece, si no se sabe lo que se sanciona, ¿Cómo se podría intentar subsanar? Es simplemente imposible. Agrega que por ejemplo, ¿Cómo

podría la empresa mejorar el acceso de un servicio higiénicos si no sabe dónde está?

Menciona que resulta evidente que del contenido de la multa que es objeto del presente reclamo no cumple dicho estándar mínimo. Agrega que no permite responder qué es lo que identificó exactamente el fiscalizador y que representaría un incumplimiento a las normas mencionadas, por lo que resulta evidente la inconsistencia y falta total de fundamentos de la multa cursada. Añade que esta sola circunstancia determina que la multa deba dejada sin efecto.

Precisa que se debe dejar sin efecto la Multa N°6 por haber sido cursada con manifiesto error de derecho. Agrega que la norma invocada es incorrecta.

Razona que la Inspección del Trabajo cursa una multa que se funda, supuestamente, en que la empresa cuenta con servicios higiénicos de uso mixto y por ello, como se indicó, entiende infringido el artículo 21 del Decreto Supremo N°594 de 1999.

Pues bien narra, el artículo 21 citado, dispone lo siguiente:

“Todo lugar de trabajo estará provisto de servicios higiénicos, de uso individual o colectivo, que dispondrán como mínimo de excusado y lavatorio. Cada excusado se colocará en un compartimiento con puerta, por separado de los compartimientos anexos por medio de divisiones permanentes.

Cuando la naturaleza del trabajo implique contacto con sustancias tóxicas o cause suciedad en el cuerpo, deberán disponerse de duchas con agua fría y caliente para los trabajadores afectados. Si se emplea un calentador de agua a gas para las duchas, éste deberá estar siempre provisto de la chimenea de descarga de los gases de combustión al exterior y será instalado fuera del recinto de los servicios higiénicos en un lugar adecuadamente ventilado.”

De esta manera advierte, inmediatamente se puede advertir que la norma no impone al empleador la prohibición de contar con servicios higiénicos de uso mixto. Por el contrario agrega, solo establece, entre otros, que los

servicios higiénicos serán de uso individual o colectivo, y que se debe contar con duchas con agua fría y caliente.

Nuevamente señala, el fiscalizador se vale de normas generales para concluir que se han infringido obligaciones específicas.

Expresa que en este sentido, el artículo 22 del Decreto Supremo N°594 de 1999 expresamente indica que:

“En los lugares de trabajo donde laboren hombres y mujeres deberán existir servicios higiénicos independientes y separados.”

Sin embargo dice, aquella norma no ha sido invocada en la Resolución de Multa N°8507/21/37, sino que únicamente se recurre al artículo 21 del D.S. N°594. Ello evidencia que el fiscalizador incurrió en un error al momento de invocar la norma que se entiende infringida. Aquello no resulta procedente añade, ya que el fiscalizado debe saber con precisión cuál es la disposición que ha incumplido.

Sostiene que en este caso, la norma que efectivamente regula que los lugares de trabajo deben contar con servicios higiénicos separados para hombres y mujeres, no fue considerada por el inspector.

Al respecto explica, cabe recordar que la Inspección del Trabajo no podrá complementar su resolución mediante la contestación del presente reclamo judicial de multas.

Indica que de acuerdo con los antecedentes expuestos, es claro que la resolución no se ajusta a los principios que regulan la actuación de la Administración del Estado. Agrega que en su calidad de funcionario público, el fiscalizador se encuentra obligado a observar íntegramente las normas y principios propios que rigen la Administración del Estado, ello con el objeto de proteger las garantías y derechos de todos los involucrados en los actos administrativos y ello no se cumple en este caso.

Manifiesta que la importancia que el legislador le ha dado a los principios administrativos no es baladí. En este sentido añade, dichos principios han sido consagrados reiteradamente en nuestra legislación en diversos instrumentos.

Entre ellos agrega, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado dispone en su artículo 3° que:

“La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas (...)”.

En el presente caso refiere, es indudable que las multas cursadas por el fiscalizador han sido manifiestamente contrarias a principios centrales que rigen la Administración del Estado, especialmente, al principio de legalidad, probidad, transparencia, imparcialidad y congruencia.

Alega que en primer lugar, el principio de legalidad, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y en el artículo 2° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado N°18.575, dispone que los órganos administrativos, como todo órgano del Estado, sólo pueden ejercer las atribuciones y potestades que expresamente les atribuye la Constitución y las leyes.

Así hace presente, en el caso de los funcionarios de la Inspección del Trabajo, el principio de legalidad determina que sólo puedan actuar dentro de los parámetros que la ley específicamente les faculte a hacer. Agrega que ello implica que los actos administrativos sólo son válidos en cuanto encuentren su fundamento en la ley.

Por su parte establece, el Estatuto Administrativo al referirse a la probidad administrativa en su artículo 62° letra g) establece que:

“Serán obligaciones de cada funcionario: observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés privado sobre el público.”

Menciona que de esta manera, las normas de probidad imponen a los funcionarios del Estado la obligación de actuar en conformidad con los intereses públicos, de manera imparcial e intachable. Agrega que ello se

traduce en el correcto ejercicio de las facultades que le han sido otorgadas, prohibiendo actuaciones que impliquen el ejercicio impropio de sus potestades.

A este respecto precisa, la Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en su artículo 11° consagra el principio de imparcialidad, señalando que:

“La Administración del Estado debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del proceso como en las decisiones que adopte.

Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”

Narra que en tal sentido, la imparcialidad es un elemento esencial para garantizar la transparencia y objetividad en los procedimientos que se efectúan por parte de la Administración del Estado.

Por su parte advierte, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en su artículo 13° señala que:

“Los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan.

La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en el ejercicio de ella.”

En definitiva razona, el principio de transparencia consiste en respetar, promover y cautelar el conocimiento, contenido y fundamentación de las decisiones que se adoptan en el procedimiento administrativo.

Señala que por último, el principio de congruencia exige que la resolución del conflicto o término del procedimiento sea coherente y armónico con las pretensiones y actuaciones que en dicho contexto se han desarrollado y llevado a cabo.

En el presente caso indica, no solo se cursaron multas que sancionan más de una vez un mismo hecho, sino que dichos hechos no se vinculan siquiera remotamente con las normas que se entienden infringidas.

Explica que en consecuencia, la multa no sólo fue cursada con manifiesto error de hecho y de derecho, sino que es producto que una actuar completamente desapegado a los procedimientos, por lo que no es procedente, bajo circunstancia alguna, que sea la parte afectada y transgredida quien deba soportar las consecuencias de dicho comportamiento.

En subsidio sostiene, las multas deben ser dejadas sin efecto ya que omiten señalar los motivos por los cuales aplica el monto máximo del rango.

Dice que en el presente caso no se indican las razones por las cuales se aplica el monto máximo del rango de la multa. Agrega que la facultad establecida en el artículo 503 del Código del Trabajo, que autoriza a los inspectores del trabajo para que puedan aplicar sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social, reconoce límites al ser una manifestación de la potestad sancionatoria del estado.

Expone que en nuestro ordenamiento jurídico garantiza ese derecho, con el preciso objeto de evitar el abuso por parte de la administración del estado al momento de aplicar sanciones. En el mismo sentido agrega, la ley N°19.880 ya citada, establece en su artículo N°16 el principio de transparencia y publicidad, estableciendo taxativamente que:

“... el procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él”.

Manifiesta que especificando lo señalado precedentemente, cabe señalar que la facultad sancionadora del Estado o sus Puniendi estatal, ya sea en su manifestación penal o administrativa, dada su evidente naturaleza común sancionatoria, debe respetar los mismos principios de legalidad y tipicidad que son ampliamente considerados en el ámbito criminal, y sus derivados tales como el principio de culpabilidad, etc.

Refiere que ilustra en tal sentido el fallo de fecha 15 de noviembre de 2007, dictado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco en los autos Rol N°1464-2007 ([www.legalpublishing.cl](http://www.legalpublishing.cl), jurisprudencia on line, N° Legal Publishing 37758), causa que en su considerando 15. cita, a su vez, el fallo del Tribunal Constitucional en los autos Rol N°244-1996, de fecha 26 de agosto de 1996, la que sostiene en su considerando noveno que:

“Los principios inspiradores del orden penal contemplados en la CPR han de aplicarse, por regla general al derecho administrativo sancionador, puesto que ambos son manifestaciones del ius puniendi del Estado”.

El mismo fallo cita alega, a su vez, la sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de julio de 2006, en los autos Rol N°480-2006, que establece:

“(…) Que la aplicación de las garantías constitucionales del Derecho Penal al Derecho Administrativo sancionador tiene una larga tradición en el derecho chileno, pues ya hace cuarenta años, la Corte Suprema interpretó que la voz “condenados del artículo 11 de la Constitución de 1925 era aplicable a quienes sufrían sanciones administrativas (...)”

Hace presente que lo anterior deja en evidencia que es un aspecto zanjado por la jurisprudencia de nuestros tribunales el que, en materia de derecho administrativo sancionador, son plenamente aplicables las garantías constitucionales referidas y ya señaladas.

Establece que la necesaria justificación ha sido expresamente reconocida por nuestra Excma. Corte Suprema, en Sentencia de 5 de mayo de 2008, rol 2.012-2008, que con ocasión de pronunciarse sobre la decisión de Gendarmería de Chile de otorgar beneficios carcelarios expresa:

“2º. Que aun tratándose del ejercicio de una atribución discrecional o facultativa de la administración, como es la relativa a conceder de la libertad condicional a quienes cumplen con los requisitos previstos por la ley para acceder al mismo, esta potestad debe concluir con una decisión debidamente fundada, por aplicación del principio de la imparcialidad establecido en el artículo 11 de la Ley de Procedimiento N° 19.880 del año 2003, que exige que

los actos administrativos deben ser motivados, esto es, se deben señalar los hechos y fundamentos en que se sustentan. 3º Que, en consecuencia, la ausencia de expresión de las motivaciones conduce a la ilegalidad del acto administrativo, particularmente atendido a que el acto ejecutado afecta un derecho tutelado en la Constitución Política de la República, como es el de igualdad ante la ley.”<sup>1</sup>

De esta manera menciona, la resolución de multa debió determinar el monto de la multa conforme a criterios racionales y fundados, como lo son la gravedad y las consecuencias del hecho, o bien, la reiteración de las infracciones similares. Dado que ninguno de dichos fundamentos existe, es preciso concluir que la multa es, en cualquier caso, ilegítima y, en ese sentido, en el improbable caso que SS. considere que el hecho reprochado justifica la aplicación de alguna sanción, ésta deberá ser ajustada a la realidad y circunstancia de los hechos.

Precisa que en el presente caso no bastaba con indicar que su representada no cumplió con una obligación legal, debía indicar por qué aplica el desproporcionado monto de la multa. Por ende agrega, el acto administrativo sancionador a que se refiere la presente reclamación, no se basta a sí mismo, debiendo ser dejado sin efecto.

En subsidio narra, solicitan que las multas sean rebajadas al mínimo del rango. las multas son desproporcionadas y sancionan 3 veces los mismos hechos.

Razona que sin perjuicio de lo que han señalado, para el remoto caso que el Tribunal estime que la infracción está correctamente cursada, la multa debe ser rebajada al mínimo legal.

Señala que los hechos anteriormente señalados determinan que el supuesto incumplimiento constatado no justifica el monto de la multa, carece que fundamento y sanciona los mismos hechos de manera reiterativa. De esta forma agrega, no cabe sino rebajar drásticamente la misma.



Explica que así se ha declarado en otros casos similares en los que tribunales con competencia laboral han reducido considerablemente multas cursadas por la Inspección del Trabajo por tales motivos.

Al respecto dice, podemos citar la multa impugnada por medio de reclamo judicial caratulado “Sodimac S.A. con Inspección Provincial del Trabajo de Temuco”, tramitado bajo el Rit I-73-2016 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, ocasión en la cual también se cursó una multa de 20 IMM porque al empleador le faltó exhibir registro de asistencia de solo 3 meses, en relación a muchos otros documentos solicitados. Añade que al respecto el tribunal redujo drásticamente la multa, señalando:

“El artículo 31 del D.F.L. N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social establece que los funcionarios del trabajo podrán requerir de los empleadores y de sus organizaciones, toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización que les corresponda. Toda aquella documentación que derive de las relaciones de trabajo deberá mantenerse en los establecimientos y faenas en que se desarrollan labores y funciones.

Que la reclamante reconoce que no presentó el registro de asistencia de la trabajadora Soledad Piutrin, de los meses de marzo, abril y mayo 2015, debido a que dicha trabajadora había sido trasladada en diciembre de 2015 desde la sucursal Los Ángeles hasta la sucursal Temuco, y atendido el escaso plazo concedido por el fiscalizador, no se pudo tener los registros de asistencia superiores a seis meses, los que estaban archivados en la sucursal Los Ángeles.

Que el fiscalizador concedió un plazo formal de cuatro días hábiles, desde el 27 de abril al 4 de mayo de 2016, sin embargo la resolución de multa es de fecha 10 de mayo de 2016, plazo suficiente para que la empresa pudiera haber llevado dicha documentación a la inspección del trabajo.

En consecuencia se constata la infracción a la legislación laboral por no exhibir toda la documentación que deriva de las relaciones de trabajo, circunstancia que debió haber tenido en cuenta la empresa al haber trasladado

a la funcionaria hasta Temuco, solicitando oportunamente toda la documentación referente a dicha trabajadora.

Sin perjuicio de lo anterior, y atendida la cuantía de la multa impuesta, que resulta desproporcionada en relación a la infracción constatada, este tribunal procederá a rebajarla a tres ingresos mínimos mensuales no remuneracionales.

En ese mismo sentido, esto es, rebajando multas cursadas por ser desproporcionadas en razón de la infracción, podemos citar las sentencias dictadas en las causas:

- La sentencia de fecha 8 de febrero de 2018, dictada en causa I-72-2018, del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt.
- La sentencia de fecha 7 de agosto de 2018, dictada en causa I-8-2018, del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas.
- La sentencia de fecha 21 de septiembre de 2018, dictada en causa I-24-2018, del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua.

En base a lo antes señalado, en subsidio de lo antes mencionado, solicitamos que la multa sea rebajada por resultar a todas luces desproporcionada en relación a los hechos que la fundamentan.

**SEGUNDO:** Que la reclamada estando dentro de plazo y evacuando el traslado que le fuera conferido, solicita el rechazo de la demanda de autos, con expresa condenación en costas.

Indica que la actora ha impugnado por esta vía la Resolución de Multa Nº 85 07/21/37 1 3 4 y 6 de fecha 21 de septiembre de 2021, dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago y que le fuera cursada, en lo pertinente, por:

1. No asesorar ni desarrollar el departamento de prevención de riesgos, acorde con las funciones mínimas exigidas, las labores como el reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, el control de los riesgos en el ambiente o medios de trabajo (no se confecciona matriz de riesgos, no se realiza el levantamiento de los servicios higiénicos, no existe evaluaciones ambientales cualitativas o cuantitativa). Tal hecho es un

incumplimiento a las obligaciones legales sobre prevención de riesgos profesionales e implica no disponer las medidas que protejan eficazmente la vida y salud de los trabajadores al interior de la empresa

3. No mantener las condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral al no identificar los peligros y evaluar los riesgos que están presentes en el lugar de trabajo, según el siguiente detalle: empresa no posee confeccionada la matriz de riesgos del lugar fiscalizado. lo que afecta a los siguientes trabajadores: Dennisse Aguirre, Anita Beltrán, Francisco Campos, María Diaz, María Estay, Ignacio Farías, Angélica Gálvez, Jesús Guzmán, Luz Hurtado Y Verónica Palma.

4. No disponer de duchas con agua fría y caliente, no obstante que por la naturaleza del trabajo se toma contacto con sustancias tóxicas o causan suciedad corporal (solo hay una ducha correspondiente al área de kinesiología, la cual es de uso mixto (hombre – mujeres), además es usada por clientes). situación que afecta a los siguientes trabajadores: Dennisse Aguirre, Anita Beltrán, Francisco Campos, María Diaz, María Estay, Ignacio Farías, Angélica Gálvez, Jesús Guzmán, Luz Hurtado Y Verónica Palma. Tal hecho constituye incumplimiento a las condiciones legales de saneamiento básico de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la salud e higiene de los trabajadores

6. No contar los servicios higiénicos según los requisitos mínimos legales en el lugar de trabajo (servicios higiénicos de uso mixtos y de acceso restringido por áreas de salud), situación que afecta, entre otros, a los siguientes trabajadores: Dennisse Aguirre, Anita Beltrán, Francisco Campos, María Diaz, María Estay, Ignacio Farías, Angélica Gálvez, Jesús Guzmán, Luz Hurtado Y Verónica Palma. tal hecho constituye incumplimiento a las condiciones legales de saneamiento básico de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la salud e higiene de los trabajadores

Expresa que desde ya hace presente que los hechos que configuran las infracciones sancionadas fueron constatados por la fiscalizadora de este

Servicio doña Claudia Fernández Rojas, funcionaria dependiente de ella, en el cumplimiento de sus funciones, los cuales se consignaron en la resolución de Multa y en el informe de fiscalización respectivo, los cuales gozan de presunción legal de veracidad establecida en el art. 23 de D.F.L. N°2 de 1967, Ley Orgánica de este Servicio, que opera para todos los efectos legales, incluso para la prueba judicial, lo que en concordancia con el art. 1698 del Código Civil, determina que la carga de la prueba corresponderá a la reclamante, quien deberá probar que su actuar se ha ajustado a la normativa laboral vigente.

Ahora bien sostiene, haciéndose cargo de las alegaciones de la reclamante en relación a la multa 1, cabe tener presente lo siguiente:

Explica que lo primero que objeta la reclamante es que la multa sería ininteligible, cuestión que resulta claro que no es efectiva, de la sola lectura de la resolución, la cual señala con claridad que lo que se objeta es que el departamento de prevención de riesgos no efectúa las labores mínimas que le exige la ley, citándosele entre paréntesis cuales son las actividades que no efectúa. Agrega que llama profundamente la atención que la reclamante señale no entender por ejemplo cual es la evaluación ambiental que no se realiza, pero evidentemente esto no hace más que confirmar la veracidad de la sanción, puesto que, si su departamento de prevención de riesgos hiciera sus labores mínimas, evidentemente entendería que es una evaluación ambiental del lugar de trabajo, y no pensaría que es una referencia ininteligible.

Dice que unido a lo anterior la reclamante pretende que las normas a las que hace referencia la resolución de multa no guardan relación con lo sancionado, en circunstancias que la revisión de dichas normas deja de manifiesto que estas se refieren a la obligación de contar con un departamento de prevención de riesgos y a las labores mínimas que este debe realizar, a las cuales se refiere concretamente el artículo 8 inciso 2do del DS 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo. Por lo que agrega, dado que lo sancionado es que el departamento de prevención de riesgos no realiza sus funciones mínimas, lo

cierto es que cada una de las normas citadas resultan plenamente atingentes a lo sancionado.

Manifiesta que además la reclamante que los documentos que darían cuenta de las obligaciones incumplidas no fueron requeridos, lo cual no es efectivo, puesto que en el informe de fiscalización deja constancia de manera expresa de que estos fueron requeridos y que se le señaló que no habían sido confeccionados, razón por la cual no aparece que exista error alguno a este respecto.

Refiere que en relación a la supuesta infracción al principio de non bis in ídem entre la multa 1 y las multas 3 y 6, ciertamente no concurre tal infracción, puesto que es bastante obvio que la reclamante la justifica en la coincidencia de ciertas palabras entre dichas sanciones, pasando por alto que cada una de ellas se sanciona cuestiones claramente diferenciadas, por una parte la falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte del departamento de prevención de riesgos, y por otra la falta de evaluación de riesgos y el incumplimiento respecto de las condiciones legalmente exigibles para los servicios higiénicos, por lo que no aparece de manera alguna la infracción alegada por la contraria.

Alega que en relación con las alegaciones relativas a la multa 3, lo primero que refiere la reclamante es que la descripción de los hechos sería genérica e ininteligible, cuestión que se puede descartar de su sola lectura, puesto que la multa es bastante específica al señalar que lo que se sanciona es no haber confeccionado la matriz de riesgos del lugar de trabajo fiscalizado, pero la reclamante lleva su intento de plantear que la multa es confusa al extremo de objetar que la fiscalizadora no le señala a que riesgos se refiere, lo cual es absurdo, puesto que precisamente el hecho de confeccionar la matriz de riesgos es lo que le indicará a la empresa cuales son los riesgos que existen en el lugar de trabajo, y obviamente a la fiscalizadora no le corresponde evaluarlos para decirle cuales son.

Hace presente que además la reclamante que la matriz de riesgos no le fue solicitada, cuestión que no corresponde a lo constatado por la fiscalizadora actuante, y que cuenta con presunción legal de veracidad, quien expresamente

refiere que solicitada la matriz de riesgos la fiscalizada responde que no la ha confeccionado.

Establece que adicionalmente cabe considerar que la evaluación de los riesgos es una consideración básica en cuanto al cuidado de la vida y salud de los trabajadores, puesto que si la empleadora no conoce cuales son los riesgos asociados a cada actividad de la empresa, malamente podrá saber cómo prevenirlos, que medidas o procedimientos adoptar y que elementos de protección entregar, por lo cual es uno de los elementos básicos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo.

Menciona que en relación a las alegaciones relativas al non bis in ídem nos remitimos a lo ya señalado en el apartado anterior.

Precisa que en relación a la multa 4, la reclamante señala que no es efectivo que sus trabajadores utilicen sustancias toxicas, sin hacerse cargo de manera alguna de que la sanción no solo menciona sustancias toxicas, si no suciedad corporal, cuestión que, desde ya, y considerando que la multa cuenta con presunción legal de veracidad, no puede sino considerarse como reconocida por la reclamante, y por ende no sujeta a discusión. Ahora bien añade, y respecto a las sustancias toxicas, cabe tener presente que la propia reclamante remitió a la fiscalizadora la ficha técnica de las sustancias usadas por los trabajadores, la cual consta en el expediente de fiscalización, la cual da cuenta del uso de sustancias químicas que no deben estar en contacto con la piel, que requieren el uso de elementos de protección y que hacen necesaria la limpieza de la piel y el cambio de vestuario en caso de contacto con la piel o la ropa, motivos por los cuales la reclamante debe tener tanto vestidores como, evidentemente, duchas.

Narra que cabe tener presente que la reclamante señala que habria un trabajador mencionado en la multa 4 que no sería trabajador de la empresa, lo primero que cabe observar al respecto es que tal alegación es del todo inepta, puesto que no señala cual sería el supuesto trabajador que no sería dependiente suyo, lo que desde ya impide a esta parte acreditar o explicar ninguna situación a este respecto, por lo que no cabe si no solicitar su

inmediato rechazo, máxime cuando las muestras de trabajadores para efectos de la fiscalización se construyen con la información que aporta la propia reclamante, no observándose tampoco que en momento alguno de la fiscalización planteara que alguno de los trabajadores por los cuales se fiscalizaba no fueran dependientes suyos, lo cual desde ya nos lleva a pensar que si fuese efectivo que en la nómina existe un trabajador que no es de la reclamante, esto se debe única y exclusivamente a la negligencia de la propia reclamante, y no a un error cometido por la fiscalizadora.

Pero razona, y esto es lo que más llama la atención, la nómina de trabajadores por los que se cursa la multa 4, es idéntica a la de las multas 3 y 6, también reclamadas en estos autos (y de la 5 en que la reclamante ha señalado que pedirá reconsideración por cumplimiento posterior), pero, respecto de dichas sanciones no se alega que haya un trabajador ajeno a la empresa, lo cual, unido a la omisión por parte de la reclamante de señalar que trabajador sería el que no corresponde, no nos hace si no concluir que tal alegación no es efectiva, y que posiblemente fue incluida por error en la demanda, puesto que no se condice con el resto de las alegaciones, ni se sustenta en fundamentación concreta alguna.

Advierte que en relación a la multa 6 la reclamante alega en primer término que la multa sería ininteligible pues pretende no entender a qué sector de la empresa se refiere, alegación que resulta del todo absurda, puesto que la multa señala con claridad que se refiere al lugar de trabajo de una nómina concreta de trabajadores, por lo que, salvo que la reclamante sostenga que desconoce en qué dependencias prestan funciones sus propios trabajadores, lo cual es por cierto inverosímil, tal alegación carece de cualquier sustento lógico.

Señala que luego agrega que en ningún momento la ley le impide tener servicios higiénicos mixtos, lo cual es a todas luces erróneo, puesto que el DS 594 señala en su artículo 22 que “En los lugares de trabajo donde laboren hombres y mujeres deberán existir servicios higiénicos independientes y separados.” lo cual resulta evidente, se refiere a separados entre hombres y mujeres, porque si no resultaría absolutamente innecesaria la mención a ellos.

No pudiendo ampararse la reclamante en que la resolución solo se refiere al artículo 21, puesto que por un parte dicho artículo es el que fija la base de la exigencia de servicios higiénicos, siendo la normativa subsiguiente la especificación de dicha obligación primaria, no pudiendo la reclamante obviar por lo tanto dicha obligación, puesto que esto implicaría alegar ignorancia de la ley.

Explica que respecto de las alegaciones por la supuesta infracción a los “principios más básicos que regulan la actuación de la administración del estado” (sic) esta parte estima que no pueden si no ser rechazadas, puesto que más que alegaciones concretas contra las multas cursadas, constituyen más bien una somera exposición respecto a en qué consisten los principios que cita, sin vincularlos de manera alguna con las multas reclamadas en autos, por lo cual evidentemente resultan irrelevantes a efectos de la decisión sometida al conocimiento de SS.

Dice que respecto a la solicitud subsidiaria de dejar sin efecto las multas dado que “omiten señalar los motivos por los cuales se aplica el monto máximo del rango”, en primer término salta a la vista la incongruencia de la alegación, puesto que aun en el supuesto que el Tribunal estimare que el funcionario actuante debía justificar el monto de las multas (cuestión improcedente según se explicará) la omisión a este respecto solo justificaría razonablemente que se revisara la cuantía y eventualmente la ajustara, pero en ningún caso, habiéndose verificado que las infracciones existen, procedería dejarlas sin efecto como pretende la reclamante. Tampoco puede perderse de vista que no es efectivo que todas las multas se hayan cursado en el rango máximo como pretende la reclamante, puesto que, de las multas reclamadas, la multa 1 solo ha sido cursada por 40 UTM.

Ahora bien sostiene, respecto de los motivos por los cuales las multas se han cursado en los montos que determina la resolución reclamada, cabe recordar que el artículo 506 CT establece como criterios para efectos de la determinación de las sanciones solo dos factores: el tamaño de la empresa, en este caso una gran empresa en los términos del artículo 505 bis, y la gravedad



de la infracción, ahora bien, respecto a la gravedad de la infracción, esta se encuentra previamente determinada por la Dirección del Trabajo, en uso de sus facultades legales, mediante el Tipificador de hechos infraccionales que se encuentra publicado en su página web, por lo cual, no corresponde en caso alguno que el fiscalizador determine cuál es la gravedad de la infracción a efectos de fijar la cuantía de la multa, puesto que tal cuestión ya ha sido fijada por el Servicio.

Expresa que respecto a la solicitud subsidiaria de rebaja por supuesta desproporción de las multas, cabe tener presente que la reclamante no explica de manera alguna en qué consistiría la supuesta falta de proporcionalidad, y limitándose a la referencia de rits de “casos similares” en los cuales, y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 3 del Código Civil, no se observa similitud alguna. No pudiendo si no reiterar que cada una de las multas se encuentra ajustada a los rangos legalmente establecidos, y de conformidad a los parámetros de gravedad previamente determinados, por lo cual no aparece que exista motivo legal alguno para la rebaja.

Así las cosas indica, no aparece que haya existido error alguno en las multas cursadas, en ninguno de los ámbitos a que estas se refieren, por lo que, en virtud de lo anteriormente expuesto, y habiéndose dictado la Resolución reclamada conforme a derecho, es que esta parte estima que no debe ser modificada de manera alguna.

**TERCERO:** Que con fecha 27 de enero de 2022 tuvo lugar la audiencia preparatoria, en ella el tribunal fijó los siguientes hechos controvertidos, a saber:

- a) Que mediante Resolución N°8507/21/37 de 21 de septiembre de 2021 se cursaron seis multas a la reclamante por diversas causas y diversos montos.
- b) Que por el presente acto se recurre de las multas N° 1, 3, 4 y 6, cuyos hechos se contienen en la respectiva resolución.

Luego el tribunal llamó a los litigantes a **conciliación**, proponiendo al efecto el Tribunal bases concretar de un posible acuerdo, el cual no prosperó.

Atendido lo precedentemente relatado y existiendo al juicio del tribunal hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se fijó el siguiente **hechos a probar**:

Contenido de la Resolución N°8507/21/37 N° 1, 3, 4 y 6 y efectividad de haber incurrido la reclamante en las infracciones que allí se contienen, antecedentes de ello.

**CUARTO:** Que la parte demandante incorporó en la audiencia de juicio los siguientes medios de prueba, a saber:

**I.- Documental:**

Incorporó en la audiencia de juicio los siguientes documentos no objetados de contrario, consistentes en:

1. Copia de Resolución de Multa N°8507/21/37, de fecha 21 de septiembre de 2021.

2. Copia de Notificación de Requerimiento de Documentación N° de Fiscalización 2958, de fecha 9 de septiembre de 2021.

3. Copia de Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de UC Christus Servicios Ambulatorios SpA.

4. Copia de comprobante de entrega del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad a los trabajadores Dennisse Aguirre Zapata, Francisco Campos Baeza, Ignacio Farías Tapia, María Virginia Estay Cifuentes, María Soledad Díaz Pacheco, Anita Beltrán, Luz Hurtado y Verónica Palma.

5. Copia del contrato de trabajo de los trabajadores Dennisse Aguirre Zapata, Francisco Campos Baeza, Ignacio Farías Tapia, María Soledad Díaz Pacheco, Anita Beltrán Martínez, Angélica Gálvez, Luz Hurtado Rivas.

6. Copia Reconsideración administrativa de Resolución de Multa N°8507/21/37 N°2, presentado con fecha 22 de diciembre de 2021.

7. Copia de Solicitud de recurso administrativo, presentado en Oficina de Partes de la Dirección del Trabajo con fecha 22 de diciembre de 2021, número de expediente E238865/2021.

8. Copia de anexo de contrato de trabajo de Walter Willy Carbajal Pocco, de fecha 16 de diciembre 2021.

9. Copia de anexo de contrato de trabajo de Cristian Esteban Flores Rojas, de fecha 16 de diciembre de 2021.

## **II.- Exhibición de documentos:**

La parte demandante pidió se exhibiera el informe de fiscalización, respecto del cual se objetó por falta de autenticidad, lo que se resolverá más adelante.

**QUINTO:** Que por su parte la demandada incorporó los siguientes documentos, a saber:

1. Caratula de informe de fiscalización y anexo informe de exposición.
2. Resolución de multa 8507/21/37
3. Formulario FI-1 Notificación de inicio de procedimiento de fiscalización.
4. Correos electrónicos en que se desarrolló parte de la fiscalización con sus respectivos documentos anexos.

**SEXTO:** Que previo a resolver acerca del fondo del asunto deducido en juicio, debe emitirse pronunciamiento respecto de la objeción de documentos realizado por la parte demandante, en la audiencia de juicio.

## **I.-EN CUANTO A LA OBJECION DE DOCUMENTOS:**

**SEPTIMO:** Que en la audiencia de juicio la parte demandante objeto por falta de integridad el informe de exposición ofrecido en la demandada, por cuanto dicho documento no corresponde al formato ordenado por el Manual de Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo.

**OCTAVO:** Que al respecto la demandada señaló que el informe de fiscalización contiene la firma del fiscalizador. Agrega que se funda además en un Manual de Fiscalización del año 2017, que no es prueba nueva, tal como lo indica. Indica que no es la etapa procesal para hacerlo.

**NOVENO:** Que el Tribunal recibió el incidente a prueba, fijando el siguiente hecho controvertido:

Si el informe de exposición ofrecido incorporar por la demandada se encuentra integro.

**DECIMO:** Que la parte demandante incorporo los siguientes documentos:

1. Copia de Manual del Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo, de octubre de 2021.

2. Copia de Informes de Exposición acompañados por la Inspección del Trabajo en las causas:

a) RIT I-427-2021 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

b) RIT I-79-2018 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

c) RIT I-60-2020 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

d) RIT I-195-2021 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

e) RIT I-322-2021 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

**UNDECIMO:** Que por su parte la demandada no rindió medio de prueba que debe ser ponderado por el Tribunal.

**DUODECIMO:** Que conforme lo antes indicado, la reclamante indica que el informe de exposición no sería integro, ya que no cumpliría con lo dispuesto en el Manual de Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo.

**DECIMO TERCERO:** Que de acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Procedimiento antes indicado el informe de exposición no debe contener la identificación del trabajador; tener la identificación de la empresa fiscalizada; pronunciarse respecto de todas las materias requeridas en la comisión, sean éstas denunciadas, agregadas por la Institución o derivadas de infracciones detectadas durante la investigación, salvo las excepciones que señala y éste debe ser objetivo, completo, claro, conclusivo, con buena redacción y ortografía, sin interpretaciones personales y, en general, ser correctamente elaborado en el fondo y forma.

**DECIMO CUARTO:** Que la falta de integridad de un documento dice relación con la presentación de un documento incompleto, de manera tal que no se basta a sí mismo y por ende, no puede tener el valor probatorio esperado.

**DECIMO QUINTO:** Que atendido lo antes referido, lo reclamado por la parte demandante no es la falta de integridad del documento, en orden a que el mismo carezca de hojas o pasajes, sino que no cumple con lo requerido por el Manual administrativo respectivo, motivo suficiente para desechar la presente objeción.

Que sin perjuicio de lo anterior, revisado el informe de exposición reclamado, este no aparece que se encuentre incompleto, conteniendo todo lo requerido por la documento antes referido, teniendo además uno de los formatos que habitualmente ocupa la reclamada, no siendo el único aquel que se aprecia de los informes de exposición incorporados por la demandante.

## **II.- EN CUANTO AL FONDO:**

**DECIMO SEXTO:** Que es un hecho pacífico del juicio que la demandada cursó a la demandante mediante Resolución N°8507/21/37 de 21 de septiembre de 2021 seis multas a la reclamante por diversas causas y diversos montos

a) En cuanto a la multa N° 8507/21/37-1:

**DECIMO SEPTIMO:** Que la presente multa se cursó por “1. No asesorar ni desarrollar el departamento de prevención de riesgos, acorde con las funciones mínimas exigidas, las labores como el reconocimiento y evaluación de los riesgos en el ambiente o medios de trabajo (no se confecciona matriz de riesgos, no se realiza levantamiento de servicios higiénicos, no existen evaluaciones ambientales cualitativas o cuantitativas), tal hecho es un incumplimiento a las obligaciones legales sobre prevención de riesgos profesionales e implica no disponer las medidas que protejan eficazmente la vida y salud de los trabajadores al interior de la empresa.”

**DECIMO OCTAVO:** Que a su respecto la parte demandante indica que la multa es ininteligible, careciendo de fundamentos mínimos para ser

adecuadamente comprendida; que las normas que se pretenden infringidas a saber el inciso 4 del artículo 66 de la Ley 16.744 y 8 y 12 del DS 40 en nada dicen relación con lo sancionado y que no se puede sancionar en virtud del artículo 184 del Código del Trabajo en forma genérica; que no se requirió la exhibición de la matriz de riesgos; que no existe obligación de mantener dichos documentos; que los riesgos aparecen en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa y que la empresa ya fue multada por el mismo hecho en la multa N° 3.

**DECIMO NOVENO:** Que al efecto la parte demandada señala que la multa es clara indicando que lo que se objeta es que el departamento de prevención de riesgos, las labores mínimas que exige la ley en el artículo 8 inciso 2 del DS 40, agrega que la matriz de riesgos no fue requerida por cuanto expresamente se indicó que no se contaba con el mismo y que aquello que sanciona es una situación diferente.

**VIGESIMO:** Que baste para rechazar la primera argumentación el sólo mérito de la multa reclamada, la cual luego de una adecuada lectura aparece el reproche efectuado por la demandada a la reclamante, esto es la falta de desarrollo y asesoramiento del departamento de prevención de riesgos en sus funciones mínimas, a saber el reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, el control de los riesgos en el ambiente o medios de trabajo, al no contar con matriz de riesgos, levantamiento de servicios higiénicos y evaluaciones ambientales cualitativas y cuantitativas, actividades propias de dicho organismo.

**VIGESIMO PRIMERO:** Que en cuanto al segundo argumento del tenor de las normas que se indican infringidas y su debida relación, conforme además con la caratula de fiscalización que indica que los trabajadores de la reclamante son 1135, aparece la obligación de la demandante de contar con un departamento de prevención de riesgos al tenor del artículo 8 inciso segundo del DS 40 y 66 inciso 4 de la Ley 16.744, debiendo este asesorar y desarrollar las acciones mínimas como reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, control de riesgos en el ambiente o

medios de trabajo, acción educativa de prevención de riesgos y promoción de la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, registro de información y evaluación estadística de resultados, asesoramiento técnico a los comités paritarios, supervisores y líneas de administración técnica, por lo que dicho fundamento de la solicitud de autos, debe ser desestimada.

**VIGESIMO SEGUNDO:** Que respecto a la falta de requerimiento de la exhibición de la matriz de riesgos, cabe señalar que del tenor del informe de exposición aparece que consultada la reclamante respecto de la exhibición de aquel instrumento, se le indicó que no se había confeccionado por lo que mal podría haberse requerido, siendo además insuficiente por la especialidad de la materia el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, por lo que dichas argumentaciones deberán ser rechazadas.

**VIGESIMO TERCERO:** Que finalmente en cuanto a la alegación del non bis in ídem, cabe señalar que la doctrina y la jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia han resuelto que no es posible para la autoridad administrativa sancionar más de una vez a una misma persona natural o jurídica, por un mismo hecho y fundamento, haciéndose extensivo el principio del “non bis in ídem” propio del derecho penal a esta sede, como garantía individual en el marco de lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, esto es el principio del debido proceso y la seguridad jurídica que debe imperar en el procedimiento, así la Excelentísima Corte Suprema en autos rol 5.889 -04 ha señalado “*Que el mencionado principio non bis in ídem, con arreglo al cual una persona no puede ser procesada ni condenada dos veces por un mismo hecho, para algunos (Juan Carlos Cassagne “La intervención administrativa”. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2004) configura una garantía individual innominada, originaria del Derecho Natural y en la idea que al admitirse una segunda condena por la misma infracción produce una desproporción entre la falta y el castigo*” y ha resuelto en el mismo sentido en autos 160-2009 y 1.068-2008.

**VIGESIMO CUARTO:** Que al efecto la primera de las multas se impuso por no asesorar ni desarrollar el departamento de prevención de riesgos,

acorde con las funciones mínimas exigidas, las labores como el reconocimiento y evaluación de los riesgos en el ambiente o medios de trabajo, indicando como uno de dichos instrumentos la matriz de riesgos y la tercera por no confeccionar tal documento, sin embargo el fundamento de ambas es distinto por cuanto uno es el cumplimiento de las funciones del departamento de prevención de riesgos y la otra el de las medidas de seguridad de la vida y salud de los trabajadores, motivo por el cual se rechazará tal fundamento.

b) En cuanto a la multa N° 8507/21/37-3:

**VIGESIMO QUINTO:** Que la multa en estudio fue cursada por no mantener las condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral al no identificar los peligros y evaluar los riesgos que están presentes en el lugar de trabajo, según el siguiente detalle: empresa no posee confeccionada la matriz de riesgos del lugar fiscalizado. lo que afecta a los siguientes trabajadores: Dennisse Aguirre, Anita Beltrán, Francisco Campos, María Díaz, María Estay, Ignacio Farías, Angélica Gálvez, Jesús Guzmán, Luz Hurtado y Verónica Palma.

**VIGESIMO SEXTO:** Que en relación a ella la parte reclamante indica que la descripción de los hechos que fundamentan la multa es absolutamente genérica y no sanciona ninguna conducta en específico; que el documento no fue solicitado y no se puede sancionar dos veces el mismo hecho, conforme aparece en la multa N° 1 ya señalada.

**VIGESIMO SEPTIMO:** Que por su parte la demandada indica que la multa es bastante específica al señalar que lo que se sanciona es no haber confeccionado la matriz de riesgos del lugar de trabajo fiscalizado y que consultada la reclamante acerca de la matriz de riesgos expuso que no había sido confeccionada y finalmente no corresponde el non bis in ídem de acuerdo a lo ya expuesto en relación a la multa previa.

**VIGESIMO OCTAVO:** Que en cuanto a la primera de las argumentaciones respecto a falta de especificidad de la multa de autos, cabe señalar que esta se encuentra debidamente fundada al indicar los motivos por los cuales se impone, esto es la falta de confección de la matriz de riesgos, no



siendo necesario indicar cuales serían los peligros que debe contener por cuanto esa es la empresa.

**VIGESIMO NOVENO:** Que en relación a la segunda y tercera argumentación baste lo señalado al respecto precedentemente.

c) En cuanto a la multa N° 8507/21/37-4:

**TRIGESIMO:** Que la multa antes referida se impuso por no disponer de duchas con agua fría y caliente, no obstante que por la naturaleza del trabajo se toma contacto con sustancias tóxicas o causan suciedad corporal (solo hay una ducha correspondiente al área de kinesiología, la cual es de uso mixto (hombre - mujeres), además es usada por clientes), situación que afecta a los siguientes trabajadores: Dennisse Aguirre, Anita Beltrán, Francisco Campos, María Díaz, María Estay, Ignacio Farías, Angélica Gálvez, Jesús Guzmán, Luz Hurtado y Verónica Palma. Tal hecho constituye incumplimiento a las condiciones legales de saneamiento básico de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la salud e higiene de los trabajadores.

**TRIGESIMO PRIMERO:** Que respecto a dicha multa la parte demandante indica que esta debe ser dejada sin efecto por cuanto, los trabajadores individualizados no se encuentran expuestos a sustancias tóxicas, dichos trabajadores ocupan uniforme administrativo, toda vez que son, en su mayoría ejecutivos del Centro de Especialidades Médicas, información que se desprende de un simple análisis de sus contratos de trabajo, en otras palabras, prestan funciones administrativas, a lo que se debe sumar que considera como trabajador a Jesús Guzmán, el que no lo es.

**TRIGESIMO SEGUNDO:** Que por su parte la reclamada señala que la multa no sólo se refiere a las sustancias tóxicas, sino además a la suciedad corporal, a lo cual se debe sumar que la propia demandante remitió un listado de sustancias usadas por los trabajadores dentro de los cuales se da cuenta del uso de sustancias químicas que no deben estar en contacto con la piel; asimismo indica que no se señala la persona que no sería trabajador, a lo que se debe sumar que las muestras de la fiscalización se realizan con la

información entregada por el empleador y que por otra parte las multas 3 y 6 se refieren a los mismos trabajadores sin que se haya reclamado lo anterior.

**TRIGESIMO TERCERO:** Que de acuerdo al informe de exposición incorporado en la audiencia de juicio, aparece que la multa de autos se impuso al haberse constatado que “los trabajadores de la empresa realizan toma de radiografías e imágenes en general”.

Que luego y atendido los contratos de trabajo de Dennisse Aguirre, Anita Beltrán, Francisco Campos, María Diaz, Ignacio Farías, Angélica Gálvez y Luz Hurtado, aparece que estos fueron contratados en funciones administrativas.

Que asimismo se establece que don Jesús Guzmán es mencionado como trabajador de la demandada en otras dos multas.

**TRIGESIMO CUARTO:** Que de acuerdo a los hechos antes referidos, a juicio de esta juez conforme el hecho generador de la multa de autos, no es posible establecer que los trabajadores Dennisse Aguirre, Anita Beltrán, Francisco Campos, María Diaz, Ignacio Farías, Angélica Gálvez y Luz Hurtado, estuvieren expuestos a sustancias tóxicas, por cuanto su labor era eminentemente administrativa y en nada decía relación con la toma de radiografías e imágenes, actividad que es sabido que se relaciona con agentes tóxicos.

Que respecto de los restantes trabajadores, la demandante no ha logrado destruir la presunción de veracidad que goza el informe de exposición y del cual se derivan las multas de autos, tanto en cuanto don Jesús Guzmán, no es trabajador de ellas, como que los restantes trabajadores realizaban funciones administrativas y por ende, no estaban expuestos a sustancias tóxicas.

Que así las cosas, el Tribunal no puede dejar sin efecto la multa de autos, sin perjuicio de poder ser rebajadas conforme se indicará más adelante.

d) En cuanto a la multa N° 8507/21/37-6:

**TRIGESIMO QUINTO:** Que finalmente la demandada impuso a la reclamante la multa antes referida por no contar los servicios higiénicos según los requisitos mínimos legales en el lugar de trabajo (servicios higiénicos de

uso mixtos y de acceso restringido por áreas de salud), situación que afecta, entre otros, a los siguientes trabajadores: Dennisse Aguirre, Anita Beltrán, Francisco Campos, María Díaz, María Estay, Ignacio Farías, Angélica Gálvez, Jesús Guzmán, Luz Hurtado y Verónica Palma. Tal hecho constituye incumplimiento a las condiciones legales de saneamiento básico de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la salud e higiene de los trabajadores.

**TRIGESIMO SEXTO:** Que en relación a ella la parte demandante señala que la multa es ininteligible, ya que no se indica el lugar de la empresa que cuenta con servicios higiénicos de uso mixtos y de acceso restringido por áreas de salud, no pudiendo subsanar el hecho, además de invocar una norma errónea como fundamento de derecho, sin perjuicio de no cumplir con las normas del procedimiento administrativo.

**TRIGESIMO SEPTIMO:** Que la reclamada contestando el libelo expone que al ser la multa restringida a un grupo de trabajadores, el empleador debe saber al lugar al cual corresponde, además de ser la norma general la del artículo 21 del DS 594 y en el artículo siguiente se establecen la independencia de los servicios higiénicos de hombres y mujeres, finalmente en cuanto al incumplimiento de las normas del procedimiento sólo es una enumeración de normas sin vincularlos con las multas reclamadas.

**TRIGESIMO OCTAVO:** Que en cuanto a la primera de las alegaciones cabe señalar que la multa de autos, es claramente legible, indicando las razones por las cuales se impone, no siendo requisito de la misma que de un detalle acabado de la infracción a fin de que la sancionada la corrija, máxime si participó en la fiscalización que dio origen a la misma.

Que respecto a la normativa indicada, al ser la conducta sancionada no contar con servicios higiénicos según los requisitos mínimos legales e incluyendo la conducta multada, además de no ser aquellos mixtos con acceso restringido, la norma invocada esto es el artículo 21 del DS 594, que ordena estar provisto de servicios higiénicos los lugares de trabajo, está conforme a derecho.

Que finalmente y en relación a la alegación de no cumplir la multa con el procedimiento administrativo, al no haberse indicado como aquello se refleja en la sanción en estudio, necesariamente deberá ser desestimada.

Que así las cosas, se rechazará la solicitud de dejar sin efecto esta multa.

e) En cuanto a la petición de rebaja:

**TRIGESIMO NOVENO:** Que finalmente la reclamante pide las multas sean rebajadas ya que omiten señalar los motivos por los cuales aplica el monto máximo del rango, además de ser desproporcionadas y sancionan 3 veces los mismos hechos.

**CUADRAGESIMO:** Que la reclamada al respecto indica que sólo una de las multas se impuso en su máximo legal y la cuantía se determina respecto del tamaño de la empresa y la gravedad de la conducta, añade que en cuanto a la falta de proporcionalidad, no explica cómo se produce aquello.

**CUADRAGESIMO PRIMERO:** Que respecto a la multa número 4, afectando sólo a tres de los diez trabajadores mencionados en ellas, necesariamente debe ser rebajada a 18 UTM.

Que en cuanto a las restantes multas, siendo la reclamante una empresa de más de 200 trabajadores y los hechos sancionados de gravedad, a saber la falta de funciones mínimas del departamento de prevención de riesgos, la ausencia de matriz de riesgo y la presencia mayoritaria de baños no exclusivos para hombres y mujeres, estas no resultan desproporcionadas por lo que no serán rebajadas.

**CUADRAGESIMO SEGUNDO:** Que los demás medios de prueba en nada alteran lo antes referido, por lo que no serán analizados.

Que así no se revisó el requerimiento de documentación, copia de reglamento interno y comprobante de entrega, reconsideración administrativa y demás documentos, por no modificar lo antes resuelto.

Visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 446 y siguientes, 503 del Código del Trabajo, Ley 19.880 y D.F.L. 2 de 1967, **SE DECLARA:**

I.- Que **SE RECHAZA** la objeción documental interpuesta por **UC CHRISTUS SERVICIOS AMBULATORIOS SPA** en contra de **INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO**, sin costas por haber tenido motivos plausibles para litigar.

II.- Que **SE ACOGE PARCIALMENTE** la demanda de autos interpuesta por **UC CHRISTUS SERVICIOS AMBULATORIOS SPA** en contra de **INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO**, sólo en cuanto se rebaja la multa 8507/21/37-4 a 18 UTM, rechazándose en los demás conceptos, sin costas por no haber sido totalmente vencida.

Ejecutoriada que se encuentre la presente sentencia definitiva, hágase devolución de los documentos a las partes, en el intertanto, custódiense.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

**RIT: I-412-2021**

**RUC: 21-4-0370880-9**

Dictada por doña **ANGELICA PEREZ CASTRO**, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

